

Comentario a: Los desafíos de la educación superior en América Latina, por Simon Schwartzman.

Por Juan Carlos Navarro
Especialista Principal en Ciencia y Tecnología del Banco Interamericano de Desarrollo.

El ensayo de Simón Schwartzman apunta, de forma lúcida, a la mayor parte de los principales retos de la educación superior contemporánea en América Latina. Plantea, acertadamente, que la diversificación institucional y funcional es la marca distintiva del desarrollo de la educación superior en las últimas décadas, cuestiona que la privatización sea realmente la amenaza que para muchos con frecuencia parece ser, y registra la debilidad relativa –admitiendo las excepciones del caso- de las universidades de nuestra región en materia de vínculos con empresas y mercados.

Estando en acuerdo con Simón en la aproximación general al tema, me gustaría hacer uso de la cordial invitación que Asuntos del Sur me ha hecho para discutir algunos puntos específicos, apuntando a ofrecer caminos de respuesta para las importantes preguntas que se dejan sobre la mesa al cierre de su ensayo.

El primer y más general de mis comentarios es que estoy convencido de que buena parte de las dificultades que enfrentan las instituciones y los sistemas de educación superior en América Latina tienen que ver con que la acusada diversificación que bien define Simón ha tenido lugar en los hechos, pero no en la cultura y, con alguna excepción parcial, en los marcos de política en que la educación opera. Así, aunque es cierto que se ha multiplicado el número de instituciones –no sólo privadas, por cierto, sino también públicas- y que han aparecido modalidades institucionales novedosas (instituciones post-secundarias con programas de dos o tres años, por ejemplo, o instituciones especializadas en educación a distancia, por solo mencionar algunas de las variedades), la idea de la institución de educación superior ideal no ha cambiado demasiado.

Simón apunta con mucha razón sus dudas acerca de que una sola institución pueda al mismo tiempo cumplir adecuadamente funciones diversas –como por ejemplo educar eficazmente a las mayorías, y ser líder en investigación de punta-. Comparto sus dudas, pero no estoy seguro de que la mayoría de los actores involucrados en educación superior en la región estén en el fondo de acuerdo. El ideal de en la región sigue siendo uno: la universidad comprehensiva, que aspira a ser todo para todos simultáneamente.

Esta falta de autoreconocimiento, o en todo caso de voluntad para extraer las consecuencias prácticas de la diversidad que existe de hecho, es de la mayor consecuencia, pues impide a muchas instituciones el aspirar de forma genuina a la excelencia, al tipo de excelencia que les corresponde, dado su nicho propio de actividad, su misión única, su clientela característica, sus recursos reales, su localización e inserción social y económica en una comunidad dada. Y también impide a la política pública el diseñar instrumentos adecuados a estimular el sano desarrollo de una oferta de educación superior pertinente y de alta calidad, una que permitiría enfrentar constructivamente dilemas tales como los planteados en el ensayo de Simón: ¿cómo reconciliar expansión y excelencia? ¿cómo regular adecuadamente el crecimiento del sector privado? Y otros.

En suma, creo que ya ha pasado tiempo más que suficiente desde los primeros pasos de la diversificación institucional y funcional de la educación superior en América Latina para que este ideal único y poco constructivo de institución superior sea revisado y los principales actores ejerzan el necesario liderazgo que abra el paso a un replanteamiento de los ideales vigentes acerca de la educación superior, y por ende a una idea más rica de lo que es la noción de excelencia que debe guiar cada tipo de institución.

Paso a mi segundo comentario: entiendo que uno de los mensajes importantes de Simón es que las características del modelo de gobierno que la tradición ha legado a las principales universidades latinoamericanas puede estar creando una fuerte restricción a la gestión institucional, y a que estas puedan enfrentar efectivamente los retos contemporáneos.

No pretendo debatir este tema de gran complejidad. Pero quiero apuntar que la experiencia reciente de América Latina muestra que ha sido posible, al menos en algunas áreas, mejorar la gestión, el financiamiento y los resultados de ciertas áreas del funcionamiento de las universidades, mediante la aplicación de programas externos, pero que crean incentivos para canalizar constructivamente los recursos y conductas institucionales. Un caso muy claro es el de la investigación: durante los últimos veinte años, varios países de América Latina han puesto en funcionamiento programas que, administrados por los gobiernos, ofrecen fondos concursables para proyectos de investigación, a ser asignados de forma competitiva a los científicos e instituciones que formulen las mejores propuestas según estándares profesionales de primer nivel. El avance de estos instrumentos es considerable en varios lugares, al punto que han llegado a constituir la forma usual de hacer investigación.

Este no es el único campo en el que políticas de incentivos conducidas desde afuera de las instituciones han tenido resultado: pocas áreas son tan importantes para el desarrollo de América Latina como el de la necesidad de una mejor integración de los recursos y actividades de las universidades al desarrollo económico, a la economía real y el sector productivo. En la sociedad del conocimiento en la que vivimos, la innovación y el desarrollo tecnológico se han convertido en un elemento crucial de la competitividad de las economías nacionales, y las universidades tienen una responsabilidad única como proveedoras de experticia, conocimiento y nuevas empresas. Aunque en forma hasta ahora más tentativa y menos extendida, el tema crucial de cómo mejorar la vinculación entre universidad y empresa se ha beneficiado de programas de incentivos –el BID ha apoyado este tipo de programas en varios países-, gracias a los cuales se premia a proyectos que son presentados por asociaciones de empresas con laboratorios o departamentos académicos, con el fin de mejorar la capacidad de ambas partes para trabajar juntos, aumentar la relevancia de las agendas de investigación y proporcionar una base tecnológica a la innovación empresarial.

La universidad latinoamericana está lejos de constituir un soporte adecuado para los sistemas nacionales de innovación que la mayor parte de los países de la región están construyendo como piezas centrales de sus estrategias de desarrollo. Pero experiencias de programas como los mencionados, así como experiencias innovadoras en un buen número de universidades pública y privadas en varios países, muestran posibilidades para avanzar que están al alcance de líderes institucionales y nacionales.

